

las condiciones prevenida por la normativa del artículo 69, tampoco vulnera la garantía del derecho de propiedad consagrada en el artículo 44 de la Carta Política, por lo que no deviene en inconstitucional.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que el Artículo 69 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, no viola los Artículos 43 y 44, ni Otros, de la Constitución Nacional.

NOTIFIQUESE, ARCHIVESE Y PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial.

RODIGO MOLINA A.
EDGARDO MOLINO MOLA
FABIAN A. ECHEVERS
LUIS CERVANTES DIAZ
ARTURO HOYOS

RAUL TRUJILLO MIRANDA
JOSE MANUEL FAUNDES
AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
CALOS LUCAS LOPEZ
CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

LO ANTERIOR ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Panamá, 24 de noviembre de 1992
CARLOS H. CUESTAS
Secretario General
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FALLO del 5 de junio de 1992

MAGISTRADO PONENTE: RAUL TRUJILLO MIRANDA.

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LIC. HIPOLITO MARTINEZ MEDINA PARA QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 204 DEL CODIGO PENAL.

PANAMA, CINCO (5) DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (1992).

VISTOS:

Surtida la tramitación correspondiente se procede a decidir la demanda de inconstitucionalidad promovida por el licenciado HIPOLITO MARTINEZ MEDINA, con el objeto de que se declara que es inconstitucional el artículo 204 del Código Penal.

El demandante basa su demanda en que el artículo 204 del Código Penal que establece que "... no se instruirá sumario cuando los delitos previstos en los Capítulos I, IV, V y VI de este Título, se cometan en detrimento del

cónyuge o de un pariente cercano", viola los artículos 44,

52 y 53 de la Constitución Nacional. Para tal efecto se

fundan las siguientes consideraciones:

"PRIMERO: El artículo 204 del código Penal establece específicamente que no se intruira sumario alguno cuando se trate de delitos de hurto, estafa y otros fraudes, apropiación indebida y usurpación, cometidos en detrimento del cónyuge o de un pariente cercano.

SEGUNDO: De conformidad a la norma arriba transcrita quedarían impune los delitos de hurto, estafa y otros fraudes, apropiación indebida y usurpación cuando se cometan en contra del cónyuge o de un pariente cercano.

TERCERO: El artículo 44 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972 garantiza y protege la propiedad

privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales, sin hacer distinción de ninguna naturaleza, en cuanto al parentesco o estado civil del propietario.

CUARTO: Los artículos 52 y 53 de la Constitución Nacional, establecen respectivamente que el Estado protege el matrimonio y la familia, siendo el matrimonio el fundamento legal de ésta, descansando aquél en la igualdad de derechos de los cónyuges.

QUINTO: Visto lo anterior aflora semejante incongruencia constitucional entre el artículo 204 del Código Penal con las disposiciones constitucionales arriba señaladas".

El Procurador General de la Nación, en su vista,

considera que la norma acusada no deviene en inconstitucional. En el enjundioso estudio que hace, expresa que el artículo 204 del Código Penal constituye lo que en esa rama de derecho se conoce como excusa absolutoria. Agrega que "La excusa absolutoria tiene por base razones de ética, el parentesco (sic), los motivos de utilidad pública y conveniencia social ya que al Estado le interesa que las controversias entre los cónyuges se solucionen a través del derecho civil. Con ello los cónyuges no quedan desprotegidos, ni se vulnera la igualdad de derechos, ni la propiedad de ambos, todo lo contrario".

Reproduce algunas opiniones interesantes, de las cuales transcribimos lo dicho por el tratadista colombiano

RENDON GAVIRIA:

En segundo lugar, y como razón mas valedera para fundamentar la excusa absolutoria, son los mismos intereses de la familia, institución que podría verse amenazada por la discordia y llegar hasta romperse

los lazos que la integran de sancionarse sus propios miembros por hechos atinentes a la misma familia, los que consideran algunos autores como fundamento para eximir de responsabilidad.

Fuera de lo anterior, en los delitos contra la propiedad que afectan al patrimonio familiar, la ley conjuga otra condición que sirve de fundamento a la excusa, como la existencia de un estado de necesidad como determinante del hecho.

En cuanto a los requisitos que la disposición establece, pueden ellos concretarse así:

a) Que el agente esté, respecto del ofendido, en uno de los grados de parentesco de consanguinidad o afinidad, que expresamente señala el artículo, es decir, que el ofendido sea el cónyuge no separado legalmente, el ascendiente o descendiente, el afín en línea directa, el hermano o la

hermana.

b) Que el hecho sea determinado por un estado de necesidad, propio del agente o de sus familiares. Este estado de necesidad no tiene las limitaciones que son propias al caso del artículo 430, y, por lo tanto, puede extenderse a cuestiones distintas de la subsistencia o vestido.

c) Que el agente se concrete a tomar lo que le es indispensable para atender a sus necesidades o a las de su familia. (RENDON GAVIRIA, Gustavo; Derecho Penal Colombiano, Parte Especial, Volumen I, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1973, págs. 505-506) (Lo subrayado es nuestro).

En cuanto a la supuesta violación de los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de la República, que se refiere a la especial protección que el Estado le brinda al matrimonio y a la familia, explica que, contrario a lo expuesto por el demandante, el artículo 204 del Código Penal pretende fortalecer a la familia, no debilitarla, preservándola de cualquier intento que conduzca a su desmembramiento y disolución. No existe, para el representante del Ministerio Público, desprotección ni

vulneración de igualdad de derechos. Así agrega:

Si de acuerdo con la Constitución, como queda dicho, el Estado protege al matrimonio y a la familia y aquel es el fundamento legal de éste (Arts. 52 y 53), resalta de bulto el error del recurrente como veremos más adelante, cuando afirma a foja 3 del expediente que "el artículo 204 del Código Penal, al dejar sin acción penal al cónyuge y a parientes cercanos, en lo referente a ciertos delitos que se cometan contra sus bienes, lo que está haciendo es incentivar la comisión de delitos contra la propiedad dentro del orden familiar, debilitándose así el matrimonio y la propia familia, pues éstos serían objeto de sinnúmero de conflictos de carácter penal que se quedarían impunes; y no cabe la menor duda que tales hechos afectan al cónyuge y a la familia".

Desciende el demandante que el Artículo 204 del Código Penal configura una circunstancia mixta capaz de atenuar en los delitos contra la propiedad y que en nuestro Código constituye lo que en la ciencia del derecho penal se denomina "EXCUSA ABSOLUTORIA", es decir, que aun cuando habiéndose cometido el delito, es este excusable por razones de parentesco, utilidad pública y de interés social.

La lectura atenta de los Artículos 52 y 53 de nuestro Estatuto Fundamental relacionándolos con el Artículo 204 atacado de inconstitucional nos lleva de la mano a una conclusión contraria al sentir del recurrente.

El Estado por tener la sagrada

misión y el deber de proteger a la familia, vela también porque no se desintegre éste y no permite acciones penales entre los cónyuges y parientes tratándose de delitos contra el patrimonio, dejándoles la vía civil para que diriman sus controversias. Que triste sería una sociedad donde se permitiera que un hijo denunciara penalmente a su madre porque no está conforme con lo

que ella le ha legado. Que sociedad más gris sería. Por ello es que el Estado interviene en estos casos para evitar la desintegración de la familia, porque si se desintegra ésta, se lesionan las fibras más íntimas de la sociedad requebrajándose, por tanto, el Estado mismo.

..."

El Pleno se muestra totalmente de acuerdo con el señor Procurador General de la Nación y hace suyo los conceptos emitidos en su exposición, enviados a esta Corporación. La Corte considera que la excusa absolutoria prevista en el precepto impugnado no afecta el derecho de propiedad y que, por el contrario, se trata de una norma dirigida a tutelar los intereses de familiares.

La familia, sus relaciones, sus elementos de convivencia, son intereses tutelados especialmente por la Constitución Nacional y el artículo 204 del Código Penal viene a cristalizar dicha tutela. No se trata propiamente que encuentre apoyo en el concepto de co-propiedad, como anota cierto sector de la doctrina, tomando en cuenta el régimen patrimonial de familia panameño, sino los intereses de convivencia y estabilidad familiar.

Como expone MAGGIORE en relación con el artículo 649 del Código Penal Italiano:

"El motivo de la inmunidad penal debería buscarse, según la opinión predominante, en razones éticas -aunque sean distintas de una verdadera presunción de condominio doméstico-, que aconsejen la intervención de la represión penal, cuando se trata de delitos patrimoniales cometidos entre parientes próximos" (Giuseppe Maggiore, Derecho Penal, Vol. V, Temis, 1989, pág. 199).

Por todo lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 204 del Código Penal

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

RAUL TRUJILLO MIRANDA
CARLOS H. CUESTAS
MIRTA ANGELICA F. DE AGUILERA
ARTURO HOYOS
RODRIGO MOLINA A.
JOSE MANUEL FAUNDES

AURA F. GUERRA DE VILLALAZ
CARLOS LUCAS LOPEZ
EDGARDO MOLINO MOLA
YANIXSA YUEN DE DIAZ
 Secretaria General
 Encargada

AVISOS Y EDICTOS

AVISOS COMERCIALES

La Dirección General
 del Registro
 Con vista a la
 Solicitud 357

CERTIFICA

Que la sociedad **PTOLEMAR, S.A.**
 Se encuentra registrada
 en el Tomo 495, Folio
 112, Asiento 109131, de
 la Sección de Personas
 Mercantiles desde el dos
 de junio de mil novecien-
 tos sesenta y cuatro.
 Actualizada en la Ficha
 21300, Rollo 1024, Im-
 agen 453 de la Sección de
 Micropelículas -Mercan-
 til-.

Disuelta

Que dicha sociedad
 acuerda su disolución
 mediante Escritura Públi-
 ca Número 1621 del 15
 de febrero de 1993 de la
 Notaría Tercera del Cir-
 cuito de Panamá, según
 consta al Rollo 37913,
 Imagen 64 de la Sección
 de Micropelículas -Mer-
 cantil- desde el 19 de fe-
 brero de 1993.

Expedido y firmado en la
 Ciudad de Panamá, el
 nueve de marzo de mil
 novecientos noventa y
 tres, a las 04-05-54.9 P.M.

NOTA - Esta certificación
 no es válida si no lleva
 adheridos los timbres co-
 rrespondientes.

ALPINO GUARDIA
MARTIN

Certificador

L-260.274.10

Única publicación

La Dirección General
 del Registro
 Con vista a la
 Solicitud 410

CERTIFICA

Que la sociedad **EL REAL**
NAVIGATION, S.A.
 Se encuentra registrada
 en la Ficha 31244, Rollo

1554, Imagen 122 desde
 el trece de octubre de
 mil novecientos setenta y
 ocho.

Disuelta

Que dicha sociedad
 acuerda su disolución
 mediante Escritura Públi-
 ca Número 1080 del 10
 de febrero de 1993 de la
 Notaría Quinta del Cir-
 cuito de Panamá, según
 consta al Rollo 37890,
 Imagen 83 de la Sección
 de Micropelículas -Mer-
 cantil- desde el 18 de fe-
 brero de 1993.

Expedido y firmado en la
 Ciudad de Panamá, el
 diez de marzo de mil no-
 vecientos noventa y tres,
 a las 04-09-01.3 P.M.

NOTA - Esta certificación
 no es válida si no lleva
 adheridos los timbres co-
 rrespondientes.

ALPINO GUARDIA
MARTIN

Certificador

L-259.673.16

Única publicación

AVISO DE DISOLUCION

Para los efectos del Ar-
 tículo 82 de la Ley 32 de
 26 de febrero de 1927, se
 avisa al público.

1. Que **BENMORE PANAMA, S.A.** fue organizada
 mediante Escritura Públi-
 ca número 5615 del 28
 de diciembre de 1970,
 de la Notaría Pública Se-
 gunda del Circuito de
 Panamá, e inscrita en el
 Registro Público, Sección
 de Personas Mercantiles al
 Tomo 768, Folio 268,
 Asiento 138.834 el 6 de
 enero de 1971.

2. Que dicha sociedad
 acordó su disolución
 según consta en la Escri-
 tura Pública número
 1.151 del 1ro. de febrero
 de 1993, de la Notaría
 Pública Décima del Cir-

cuito de Panamá, la que
 fue inscrita en el Registro
 Público, Sección Mer-
 cantil (Micropelícula)
 bajo Ficha 269613, Rollo
 37939, Imagen 0122, el
 día 1ro. de marzo de
 1993.

L-258.981.85

Única publicación

AVISO

Celestino Castro con
 cédula 7-75-848 vende
 el negocio **SALON Y BAR**
LA CAMPINA al señor
 José Benito Calderón,
 que a la vez trasposa el
 negocio a la Sra. ROSA
 ARDINETTE WEEKS, con
 cédula 3-80-1.

L-55574

Primera Publicación

AVISO

Yo, **SILVIA MARIA GON-
 ZALEZ DE GONZALEZ**, con
 cédula de Identidad
 personal # 7-19-744, fui
 propietaria de la **ABA-
 RROTERIA "SILVIA"**, ubi-
 cada en la Vía Fernán-
 dez de Córdoba # 41-78,
 Pueblo Nuevo, la cual
 operaba amparada con
 la Licencia Comercial
 Tipo B # 31609, hasta el 6
 de enero del presente
 Año de 1993, se la vendí
 al Sr. Lo Cke Wah Tsang
 mediante la Escritura
 Pública 137 en la Notaría
 4a. del Circuito de Pana-
 má. La anterior informa-
 ción es para solicitarle
 con el respeto que Ud.,
 se merezca el **CIERRE DE**
LA CIA COMERCIAL TIPO
B # 31609.

De Usted Atentamente,
SILVIA M. G.
DE GONZALEZ
 Céd. 7-19-744
 L-259.908.56

Primera publicación

AVISO

Para dar cumplimiento
 con lo que establece el
 Artículo 777 del Código

de Comercio, se avisa al
 público y al comercio en
 general, que mediante
 contrato privado, el
 señor Edilberto Rivera
 Chifundo, con cédula
 no. 3-63-123, vende el es-
 tablecimiento comercial
 denominado Casa de
 Empeño Rivera No. 2,
 con Patente Comercial
 No. 15749, ubicado en
 Calle 9a., Ave. Justo
 Arosemena y Amador
 Guerrero, No. 9131, Co-
 lón, a la Sociedad **CO-
 MERCIALES RIVERA, S.A.**
 L-259.927.01

Primera publicación

AVISO AL PUBLICO

Para dar cumplimiento
 con lo que establece el
 Artículo 777 del Código
 de Comercio, se avisa al
 público y al comercio en
 general, que mediante
 contrato privado, el
 señor Edilberto Rivera
 Chifundo, con cédula
 No. 3-63-123, vendió el es-
 tablecimiento con
 Patente comercial No.
 15491, ubicado en Sabani-
 tas, Corregimiento de
 Sabanita, Provincia de
 Colón, a la Sociedad
 denominada **COMER-
 CIALES RIVERA, S.A.**
 L-259.927.69

Primera publicación

AVISO

En cumplimiento del Ar-
 tículo 777 del Código de
 Comercio, por este
 medio hago saber al
 público que he vendido a
 JOSE DEL CARMEN
 ECHEVERS ALVAREZ, el
 establecimiento comer-
 cial denominado **BAR**
LA TABERNA, ubicado
 en Calle Manuel Celesti-
 no González, de la ciu-
 dad de Santiago, Provin-
 cia de Veraguas.

ANGEL SOLANILLA
 Céd. # 9-97-681

L-259.685.74

Primera publicación

AVISO

En cumplimiento del Ar-
 tículo 777 del Código de
 Comercio, por este
 medio hago saber al
 público, que he vendido
 a JOSE FELIX ARCIA RO-
 DRIGUEZ, el estableci-
 miento comercial deno-
 minado **"CANTINA LA**
UNION", ubicada en La
 Arena, Distrito de Las
 Palmas, Provincia de
 Veraguas.

ANTONIO BUGLIONE

Céd. # 4-124-2550

L-259.686.47

Primera Publicación

AVISO AL PUBLICO

Para dar cumplimiento a
 lo que establece el Ar-
 tículo 777 del Código de
 Comercio ya, Low Yee
 Mon Vda. de Chung con
 cédula No. 14-574, notifi-
 ca al público en general
 que he vendido el es-
 tablecimiento comercial
 denominado **ABARRO-
 TERIA Y CARNICERIA**
NUEVA VERAGUA, ubica-
 da en Carasquilla Calle
 Principal y Novena, Casa
 # 388 al Señor Chong Yuk
 Fun con cédula No. N-8-
 33.

L-259.682.73

Primera publicación

AVISO

Para dar cumplimiento
 al Artículo 777 del Cód-
 igo de Comercio, aviso
 que he vendido mi pro-
 piedad denominada
JARDIN SAN ANTONIO,
 ubicado en Peña Blanca
 Distrito de Las Tablas,
 Prov. de Los Santos, Li-
 cencia No. 17780, vendi-
 do a Raúl A. Céspedes,
 Céd. 8-253-589 a partir
 del 2 de octubre de
 1992.

L-33755

Primera publicación

EDICTO EMPLAZATORIO

EDICTO EMPLAZATORIO
 El suscrito Asesor Legal
 del Ministerio de Comer-
 cio e Industrias, en su
 calidad de Funcionario

Instructor en el presente
 juicio de oposición, a la
 solicitud de registro de la
 marca "AMICIL", a solici-
 tud de parte interesada

y en uso de sus facultades
 legales, por medio
 del presente Edicto:

EMPLAZA:

Al Representante Legal

de la sociedad **UNIP-
 HARM, SOCIEDAD ANO-
 NIMA**, cuyo paradero se
 desconoce para que
 dentro del término de

cuarenta (40) días, con-
 tados a partir de la última
 publicación del presen-
 te Edicto, comparezca
 por sí o por medio de